DIVERSOS TIPOS ESPECIALES DE SOCIEDADES CREADOS POR LA LEGISLACION FRANCESA

SOCIEDADES DE INVERSION - SOCIEDADES PROFESIONALES Y SOCIEDADES NACIONALIZADAS

*Por el Dr. Felipe de SOLÁ CAÑI-
ZARES.*

Las diversas legislaciones nos ofrecen ejemplos de tipos de sociedades que por su naturaleza y su funcionamiento se apartan de los tipos clásicos de sociedad. Estos tipos clásicos son las sociedades colectivas, comanditarias y anónimas, a los que puede añadirse la fórmula moderna que es la sociedad de responsabilidad limitada, la cual en los últimos tiempos ha sido adoptada por gran número de legislaciones y ha obtenido un extraordinario éxito en la práctica.

Pero al margen de estas formas clásicas existen tipos de sociedades peculiares de determinadas legislaciones. Dejando aparte las particularidades del derecho anglo-sajón, podemos citar a título de ejemplo la sociedad de capital e industria, adoptada por las legislaciones argentina, uruguayana y brasileña,¹ o la sociedad de responsabilidad limitada de interés público de la legislación mexicana.² En Francia se han creado varios tipos *sui generis* de sociedades. Recordaremos sin insistir demasiado la forma antigua de sociedad para la explotación del cargo de agente de cambio, reglamentada por el Código de Comercio francés.³ Este tipo de sociedad,⁴ se parece a una comandita por cuanto comprende dos clases de socios; el agente de cambio que responde indefinidamente del pasivo social y los su-

1 F. DE SOLÁ CAÑIZARES *L'Habilitation ou Société de Capital et Industrie*. "Bulletin Trimestriel Société Legislation Comparée", Núm. 1 y 2, 1947. Pág. 97.

2 Ley de 30 de Agosto de 1934.

3 Código de Comercio artículo 75 modificado por la ley de 2 de julio de 1862.

4 Véase C. HOUPIN y H. BOSVIEUX. *Traité General des Sociétés Civiles et Commerciales*, 7ª edición, T. I, p. 368 y siguientes.

ministradores de fondos que responden solamente por el valor de su aporte. Sin embargo difiere de la comandita porque no comporta razón social y el agente de cambio actúa en su nombre propio, y el socio responsable indefinidamente es únicamente el agente de cambio y no puede haber varios socios responsables ilimitadamente como ocurre en la comandita. Añadiremos que la participación mínima del agente de cambio, está fijada por la Ley a la cuarta parte de la suma representada por el precio del cargo y el montante de la caución. Se trata pues de una sociedad *sui generis* a la que no deben aplicarse por analogía las reglas de las otras sociedades⁵ y se ha discutido si tenía o no personalidad, y también a pesar de parecerse a la comanditaria es dudoso que se apliquen a este tipo de sociedad los preceptos del Código de Comercio que prohíben a los comanditarios inmiscuirse en los asuntos sociales.⁶

Otra forma especial de sociedad creada por la legislación, es la sociedad anónima con participación obrera, reglamentada por la ley de 26 de abril de 1917.⁷ Este tipo de sociedad no ha tenido en Francia ningún éxito en la práctica, pues la ley se limita a reglamentar un tipo especial de sociedades cuya constitución es facultativa, y prácticamente fueron muy pocas las que adoptaron esta forma, sin embargo, desde el punto de vista de experiencia jurídica, la ley francesa es interesante y cuando se discutió fué considerada como un medio de que el valor del salario estuviera en proporción con el beneficio que la empresa obtiene gracias a este salario. La reglamentación francesa permite la creación al lado de las acciones de capital, de otras acciones llamadas de trabajo, las cuales no son atribuidas a los obreros individualmente, sino a la colectividad de estos, formando una cooperativa de mano de obra. Son miembros de esta cooperativa todos los obreros de empresa de más de veintiún años, que llevan trabajando en ella al menos doce meses; las acciones son nominativas a nombre de la cooperativa e inalienables; la pérdida del empleo lleva consigo, sin indemnización, la pérdida de los derechos en la cooperativa. La cooperativa de mano de obra está representada en las asambleas generales por mandatarios elegidos en el número que hayan previsto los estatutos y que disponen de un número de votos que estará en la misma proporción que el de las acciones

5 C. HOUPIN y D. BOSVIEUX, p. 369.

6 HOUPIN y BOSVIEUX. p. 369.

7 Acerca de esta materia véase HOUPIN y BOSVIEUX T. II. p. 685 y siguientes; THALLER y PIC, *Des Sociétés Commerciales* Núm. 1933 y siguientes. Además las monografías siguientes: V. GRAMIER, *Les actions de Travail*; WAXWEILER, *L'Actionariat ouvrier*; ANTONELLI, *Les Actions de Travail dans les soc. an. a part. ouvrière*; DE BRIEY, *Essai sur l'association du capital et du travail par l'actionariat ouvrier*; MOURET, *Soc. an. a particip. ouvrière*.

de trabajo en relación con las acciones de capital. La cooperativa de mano de obra, estará obligatoriamente representada en el consejo de administración.

En tiempos muy recientes el derecho francés ha creado tres tipos de sociedades que examinaremos a continuación, comenzando por las sociedades de inversión.

Sociedades de inversión. Es una de las formas de la sociedad financiera, entendiéndose por sociedad financiera en la acepción más corriente, todo aquello cuyo activo esté constituido, en todo o en gran parte, por títulos de otras sociedades. En general se distinguen dos tipos de sociedades financieras: Las sociedades que se proponen controlar otras empresas, denominadas generalmente *Holdings* o sociedades de control, y las que se proponen únicamente ofrecer al público una colocación juiciosa del dinero, a base de los de otras compañías para influir decisivamente en su administración; en lo posible las *Holdings* deben disponer de hecho o derecho de la mayoría en las asambleas de las sociedades controladas. En cambio en las segundas lo que se busca no es influir en el gobierno de las sociedades controladas, sino poseer títulos de las mismas a base de obtener para los accionistas de la sociedad financiera un producto interesante y al propio tiempo las máximas garantías, limitando en lo posible los riesgos. A estas sociedades se las denomina de diversas maneras: *Omniums*, sociedades de cartera, sociedades de gestión financiera, sociedades de inversión. Esta última denominación, *sociétés d'investissement*, es la que adopta el legislador francés en la ordenanza de 2 de noviembre de 1945.⁸

La idea que inspira la sociedad de inversión no es nueva, en Inglaterra y Estados Unidos existen desde hace muchísimos años los "Investment trust" pero el trust es una institución específicamente anglo-sajona y esta idea en los otros países se lleva a la práctica a base de sociedades. Pero en general, los legisladores no se han ocupado de reglamentar jurídicamente las sociedades financieras, a las cuales se les presenta el grave problema de la doble imposición, pues si una ley especial no lo impide el impuesto se paga dos veces por un mismo rédito.

En tiempos recientes se han promulgado leyes especialmente dedicadas a atraer a las sociedades financieras, en particular a las *Holdings*.⁹

8 El texto de esta ordenanza ha sido publicado en *Journal Officiel* Nov. 1945, p. 7290 y rectificativos *J. Off.* 7 de noviembre 1945, p. 7352, y *J. Off.* 9 de noviembre 1945, p. 7. 422.

9 Además de las disposiciones fiscales de los Cantones suizos, ha habido leyes especiales en el Gran Ducado de Luxemburgo y en el principado de Liechtenstein.

En los últimos tiempos muchas sociedades *Holdings* se constituye en *Tanger*, y en el momento de escribir el presente artículo se está discutiendo en la comisión parlamentaria de la Cámara del Uruguay, un proyecto de ley del ministro de Hacienda para reglamentar las sociedades financieras. Existe también, una abundante literatura jurídica acerca de las sociedades de inversión.¹⁰ La reglamentación de la ordenanza de 2 de noviembre de 1945¹¹ no se refiere a las *Holdings* que son vistas con recelo por los legisladores sino a las sociedades de cartera o de inversión. Esta ordenanza¹² distingue dos clases de sociedades: Sociedades nacionales de inversión y las sociedades privadas de inversión. Las sociedades nacionales se crean mediante un informe del ministerio de Hacienda y sus estatutos deben ser aprobados por decreto. Se constituyen a base de la parte oficial de valores mobiliarios que efectúa el Estado.¹³ El consejo de Administración está formado por doce administradores de los cuales seis son nombrados por la asamblea y otros seis por el ministro de Hacienda.

Las sociedades privadas son las que están constituídas por particulares y las normas que para ellas consagra la ordenanza son también aplicables a las sociedades nacionales, en todo lo que no se oponga a la precripción oficial para las mismas. El capital de las sociedades de inversión debe ser, por lo menos, de doscientos cincuenta millones de francos, íntegramente desembolsados. Estas sociedades deben tener como único objeto la gestión de una cartera de valores mobiliarios que no puede comprender cuotas de sociedades de responsabilidad limitada. Todas las otras operaciones industriales, comerciales o financieras, están prohibidas. Deben adoptar la forma de sociedades anónimas, y no pueden crear partes de fundador y tampoco

10 PAUL RENÈ ROSSET, *Le "Holdings Companies" et leur imposition en droit comparé*; PAUL RENÈ ROSSET, *Traité Théorique et pratique des sociétés financières, "Holding Companies" et "Investment Trusts"*; J. TEHERNOFF, *Ententes économiques et financières. Cartels. Syndicats Trusts*; V. CHEMINAIS, *Les Sociétés Holdings, leur rôle économique, leur statut juridique et leur statut fiscal*; DELVAUX B. et REIFFERS E., *Les sociétés "holding" au grand Duché de Luxembourg*; CAPITAINE, *Le statut des sociétés, "holding" en droit suisse*; F. G. LECHINI, *Les Holdings, Estudio Económico, social y jurídico*. M. J. FRANCONI y M. E. GREFFIER, *Los Holdings. Problemas económicos y cuestiones jurídicas que plantean*; A. J. SIMONS, *Holding Companies*.

11 MAURANGES DE LAVAREILLE, *Lois Annotes*, 1946 p. 265.

12 Comentario en *Sirey* de MAURICE VANNAZZI. *Lois anotées* 1946, p. 265 y siguientes.

13 La ordenanza ha previsto expresamente que el Estado puede aportar los títulos que obtenga por confiscación de los beneficios ilícitos de los comerciantes o los que las empresas privadas le hayan entregado en pago del impuesto de solidaridad.

emitir obligaciones. Las aportaciones en especie no pueden ser sino valores mobiliarios admitidos oficialmente y pertenecientes a sociedades que tengan, por lo menos, tres balances anuales aprobados por su asamblea general.

Ninguna sociedad de inversión puede poseer más de 10% de los títulos estimados a su valor nominal, emitidos por una colectividad, en más de diez por ciento del número de títulos si no tienen valor nominal. Tampoco puede emplear en títulos de una misma colectividad, a no ser que fuere el Estado, más del cinco por ciento de las sumas colocadas y de las disponibles para invertir. A estas restricciones, desde el punto de vista de su estatuto jurídico, se añaden ventajas desde el punto de vista fiscal. La ordenanza modifica el Código general del impuesto directo estableciendo las dos disposiciones siguientes: 1. Plus valía dimanante de la cesión de títulos realizados por las sociedades de inversión. No está comprendida en los beneficios imponibles cuando se justifique que el precio de cesión de estos títulos ha sido empleado dentro de los tres meses, en la compra de nuevos valores mobiliarios, y que la plus valía ha sido inscrita en el pasivo del balance sobre el cual se imputan las pérdidas dimanantes de las otras operaciones de la misma naturaleza. 2. Los dividendos distribuidos por estas sociedades de inversión están exentos del impuesto sobre los réditos de los capitales mobiliarios, en la medida del montante neto, deducción hecha del impuesto sobre los réditos del valor mobiliario, del producto cobrado de las acciones de las partes de fundador, de las partes de interés y de las obligaciones, todo ello a condición de justificar que estos beneficios han soportado el impuesto sobre los réditos de los valores mobiliarios y que las acciones, las partes de fundador y las obligaciones que poseen estas sociedades revisten la forma nominativa o están depositadas en la caja central de depósitos.

Sociedades Profesionales. Las llamadas sociedades profesionales han sido creadas en el derecho francés por la ley de 17 de noviembre de 1943¹⁴ y han dado origen a comentarios diversos por parte de la doctrina.¹⁵

Se trata de unos organismos que se denominan sociedades en el texto de la ley, pero que están muy lejos de lo que generalmente se entiende por sociedad. Estos organismos profesionales no pueden nacer de la voluntad

14 Ley relativa a la gestión de los intereses profesionales, publicada en el *Journal Officiel* de 18 de Noviembre de 1943.

15 J. HAMEL, *Les Sociétés professionnelles de la Loi du 17 de Novembre de 1943*; "Journal des sociétés, 1944 N. 7 a 9"; J. VANDAMM *é Semaine Juridique* 1944, N. 419; G. LAGARDE, *Revue de L'Economie Contemporaine*, 1944. p. 15 y siguientes; G. RUPER DALLOZES 1944, 5eme Cahier; WALINE, *Revue de l'Economie dirigée*, Marzo 1944.

de las personas sino de los comités de organización, las secciones de repartición, las agrupaciones corporativas y diversos servicios ministeriales, departamentales y municipales.

Estas sociedades se consideran comerciales por poseer la forma y estar sometidas a las leyes y usos del comercio; los capitales se dividen en partes completamente desembolsadas y obligatoriamente nominativas, suscritas por los organismos profesionales fundadores o por adherentes y estas cuotas no pueden ser cedidas sin la autorización de los consejos de administración o de los gerentes.

La estimación de los aportes que no sean dinero, debe ser objeto de un informe establecido por un experto, y ninguna ventaja particular podrá ser establecida en provecho de uno de los socios.

Los administradores deben ser de nacionalidad francesa y no pueden ser nombrados en los estatutos. El modo de administrar la sociedad y las facultades de los administradores serán previstos en los estatutos. La decisión de creación de la sociedad puede disponer que el capital social será suscrito a título obligatorio por las empresas u organismos interesados, entre los cuales será repartido según la proporción que se determine. Bajo reserva de la posibilidad de conceder el capital a un interés que no exceda el seis por ciento, los excedentes de la explotación se devuelven a los socios a prorrata de las operaciones efectuadas por ellos en la sociedad, o atribuidos a los organismos profesionales fundadores. En caso de disolución, el activo que subsista después de la extinción del pasivo y reembolso del capital, no puede ser repartido entre los socios. Los socios que se retiren individualmente, aun contra su voluntad, no pueden pretender otra cosa que el reembolso de su aporte con la reducción eventual de las pérdidas sufridas.

Como puede verse estas entidades son un tipo de sociedad, que de sociedad no tiene más que el nombre. Se trata de una sociedad en la que no existen los contratantes que convienen libremente la creación de la misma, sino que los pretendidos socios pueden ser obligados a serlo aun contra su voluntad, y por su parte no existe en estas entidades la distribución de beneficios, que es precisamente uno de los caracteres especiales del contrato de sociedad.

El legislador de 1943 no ha podido ignorar lo que hacía empleando la palabra "sociedad", y como ha expresado uno de los instigadores de la ley¹⁶ ha empleado la palabra sociedad, en el sentido de la afectación de un patrimonio a la realización de una actividad profesional.

16 Ver HAMEL *op. cit.* y Revue de l'Economie Contemporaine, *loc. cit.*

Sociedades Nacionalizadas. Otros organismos que la ley denomina sociedades, son las empresas nacionalizadas en virtud de recientes¹⁷ disposiciones. En el caso de las empresas nacionalizadas se ha querido conservar la forma y organización de la sociedad comercial, así por ejemplo la ley de 2 de diciembre de 1945 nacionalizando los grandes establecimientos bancarios, establece en su artículo octavo, que las acciones de los establecimientos bancarios nacionalizados quedan trasferidas al Estado, pero el artículo diez de la propia ley, prescribe que estos establecimientos bancarios nacionalizados, continúan sometidos a la legislación comercial y a los impuestos que se refieren al comercio de banca en particular y a las sociedades anónimas en general. Ello quiere decir que puede existir en Francia una sociedad con un solo accionista que será el Estado. Esta concepción, es absolutamente opuesta a la doctrina francesa tradicional.¹⁸ Por lo que se refiere a las empresas de seguros, la ley de 25 de abril de 1946¹⁹ establece en su artículo 33 que estas empresas conservarán los estatutos jurídicos de las sociedades anónimas, y el artículo 5 prescribe que bajo la reserva de las derogaciones que resulten de la ley, las empresas nacionalizadas conservarán los estatutos de las empresas comerciales, pero como en el caso de los establecimientos bancarios, el artículo 7 que nacionaliza las empresas de seguros, establece la transferencia al Estado de todas las acciones de las sociedades nacionalizadas.

Se ha creado pues en Francia un nuevo tipo de sociedad, la sociedad nacionalizada, que no es ni puede ser una sociedad en el concepto jurídico francés, en primer lugar porque se trata de una sociedad de un solo socio, y en segundo lugar porque no existe tampoco la organización democrática de las asambleas de accionistas, previstas en el derecho francés de sociedades.

Conclusión. Los dos últimos tipos de sociedades que hemos examinado brevemente, las sociedades profesionales y las sociedades nacionalizadas nos incitan a un comentario a guisa de conclusión.

17 Ordenanza de 13 de Diciembre de 1944 y la Ley de 17 de marzo de 1945 sobre las explotaciones mineras; leyes de 8 de abril y 21 de Octubre de 1946 sobre las empresas de producción, transporte y distribución de gas y electricidad; leyes de 2 de Diciembre de 1945, 8 de abril de 1946 nacionalizando las más importantes compañías de seguros.

18 BASTIAN, *De la réunion de toutes les actions d'une société entre les mains d'une seule personne*. "Journal des sociétés", 1933, p. 65 FABIAN, *Un abus de la pratique. La société d'un seul homme*, "Rev. Inter. des sociétés", 1937, p. 69; COOPER ROYER et ses fils; *Traité des Sociétés* 1939 T. II p. 724; J. ABEILLE, *La simulation dans les droits de société*, 1933, p. 187 et ss.

19 Véase un comentario a esta ley de M. PICARD en la "Revue Generale des Assurances Terrestres" 1946 n. 2 y 3 p. 110 y Ss.

En distintas ocasiones hemos expresado nuestra opinión en el sentido de considerar inaplicable la concepción clásica contractual a las empresas modernas.²⁰

El estatuto jurídico de estas empresas desborda el cuadro estrecho del contrato de sociedad, y son muchas las empresas modernas que necesitan de un estatuto jurídico distinto al que está previsto en los Códigos.

Por estas razones hemos creído que la idea de institución puede servir de base a las distintas formas jurídicas que necesitan las empresas modernas que se constituyen adoptando formas por acciones.

El legislador francés al crear las sociedades profesionales y las sociedades nacionalizadas, ha conservado el nombre de sociedad a entes jurídicos que en realidad no lo son. Y las creaciones de la legislación adaptándose a las realidades económicas y sociales modernas, son un motivo más de confusionismo desconcertante para el jurista.

En las sociedades profesionales hemos visto que las pretendidas sociedades no está formadas por contratantes libres sino por miembros que resultan socios obligatoriamente por imperativo de la ley y, por su parte, estas curiosas sociedades no distribuyen beneficios entre los socios.

En las sociedades nacionalizadas los socios no existen, o en todo caso existe una especie de socio único que es el Estado, y la organización democrática propia de la sociedad por acciones tampoco existe.

Pero como no se han revisado los códigos y leyes vigentes y con ellos las concepciones jurídicas que los inspiraron, los legisladores denominan sociedad a un organismo que no lo es, y declaran aplicables las leyes comerciales sobre las sociedades, estableciendo al mismo tiempo, una norma especial absolutamente contraria a aquellas leyes.

Nuestra conclusión es que debe revisarse completamente la noción jurídica clásica del derecho latino al patrimonio, y que el estatuto jurídico de las empresas modernas ha de ser objeto de una reforma de fondo. Todo ello para permitir que los preceptos jurídicos se adapten a las realidades económicas y sociales de nuestro tiempo.

20 Este tema hemos venido desarrollándolo en diversas conferencias que hemos tenido el honor de pronunciar en varios países de América latina, y en algunos artículos de prensa, especialmente: *La Ley*, de Buenos Aires, 3-5, 1947, y 4-5. También en la *Revista trimestral de Derecho Comercial* de Bogotá Núm. 5, 1947.